PRESIDENCIA MUNICIPAL
CHIHUAHUA, CHIH.

Municipio de Chihuahua, Recurso de Revisión o Procedimiento Administrativo **RA10/2020**.
Se hace constar que se resolvió de manera definitiva dicho recurso o procedimiento en fecha **16/diciembre/2021**; lo anterior en cumplimiento a lo previsto en el artículo 63 fracción IV del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, por conducto de la Subdirección Jurídica, dependiente de la Secretaría del Ayuntamiento del Municipio de Chihuahua de conformidad con el artículo 33 fracción VI del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua. Algunos datos han sido clasificados como confidenciales por tratarse de datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 116 de la Ley General de Acceso a la Información Pública, y autorizados por el Comité de Transparencia del municipio de Chihuahua en la sesión **CT-ASE-002/2022** con el Acuerdo **CT-ACI-001/2022** de fecha **06/enero/2022**.

Departamento de Recursos y Procedimientos.

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CHIHUAHUA.

P R E S E N T E.-

El suscrito **LICENCIADO SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA,** en mi carácter de Secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua, con fundamento en los artículos 63 fracción IV y 203 fracción VI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, en correlación al artículo 258 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, me permito someter a consideración de este órgano colegiado el proyecto de resolución derivado del recurso de Revisión Administrativa promovido en contra de la resolución recaída en el expediente JI-065/17, de fecha veintidós de junio del dos mil veinte, emitida por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, identificado con el número de expediente **RA10/2020** del índice de la Subdirección Jurídica adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento de Chihuahua, para que en términos del artículo 266 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en correlación del artículo 28 fracción XXXI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, lo resuelva definitivamente.

CHIHUAHUA, CHIHUAHUA, A LOS DIECISÉIS DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO.

Resolución que confirma la aplicación de medidas de seguridad dentro del procedimiento administrativo JI-065/17, seguido ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua.

De las constancias que integran el expediente en que se actúa se advierten los hechos relevantes y las consideraciones que a continuación se describen:

1. ANTECEDENTES

1.1 Presentación de recurso.- El día 17 de julio de 2020 se presentó ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología escrito signado por el Lic. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), en su carácter de representante legal de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., con el propósito de interponer recurso de revisión administrativa, en contra de la resolución definitiva recaída y contenida en el expediente JI-065/17, de fecha 22 de junio de 2020, emitido por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

1.2 Oficio de la autoridad.- Con fecha veintinueve de julio de dos mil veinte, se recibió en las oficinas de la Sub Dirección Jurídica adscrita a la H. Secretaría del Ayuntamiento, el oficio número DJ-230/2020 emitido por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua, mediante el cual remite el escrito a que alude el numeral anterior.

1.3 Radicación.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinte, se radicó el presente asunto, asignándole el número de expediente RA10/2020 del índice del Libro de Registro de la Subdirección Jurídica de la Secretaría del H. Ayuntamiento.

1.4 Prevención. En el acuerdo de radicación se previno al ocursante a fin de que, en un término de tres días proporcionara a la Subdirección Jurídica los juegos de copias suficientes para notificar a los terceros en el asunto, la cual se tuvo por debidamente cumplida a través de acuerdo del día veintinueve de septiembre del dos mil veinte.

1.5 Informe.- Mediante acuerdo de fecha diecisiete de septiembre del dos mil veinte se ordenó solicitar el informe a la autoridad recurrida, misma que dio cumplimiento a través de oficio DJ-576/2020 de fecha 30 de septiembre de dos mil veinte, del cual se ordenó dar vista al recurrente y al tercero perjudicado para que manifestaran lo que estimaran conveniente, en fecha dos de diciembre del dos mil veinte.

1.6 Terceros.- Los interesados CC. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), fueron debidamente notificados el día diecinueve

de octubre del dos mil veinte, quienes se opusieron en el presente recurso el veintidós de octubre del dos mi veinte.

1.7 Manifestaciones al informe.- El recurrente las realizó mediante oficio recibido en la Subdirección Jurídica el nueve de diciembre del dos mil veinte, y los terceros interesados el dieciocho de diciembre de ese mismo año.

1.8 Prueba superviniente. El veinte de enero del dos mil veintiuno los terceros interesados fue recibido en la Subdirección Jurídica escrito consistente en la resolución de dieciocho de diciembre del dos mil veinte, mediante la cual la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología negó la suspensión del acto solicitada por el recurrente.

1.9 Audiencia de recepción de pruebas.- Tuvo verificativo el día 01 de septiembre del dos mil veintiuno a las 11:00 horas y una vez reseñado el material probatorio de las partes, admitido y desahogado, se declaró concluida la audiencia, y se concedió a las partes un plazo de 3 días hábiles a partir de que surtiera efectos la audiencia.

1.10 Alegatos.- Mediante acuerdo de fecha veinte de septiembre del dos mil veintiuno, se tuvieron por recibidos los escritos de alegatos, por una parte el presentado el seis de septiembre de dos mil veintiuno por el Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), en su calidad de apoderado legal de los terceros interesados; así como el del día siete de septiembre de dos mil veintiuno por el Lic. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), representante legal de (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A. de C.V.

1.10 Dictamen.- La persona titular de la Secretaría del Ayuntamiento, por conducto de la Subdirección Jurídica adscrita a la misma, formuló el dictamen que contiene el proyecto de resolución, y ordenó su presentación a la persona titular de la Presidencia para su aprobación.

1.11 Convocatoria a sesión de resolución. Una vez que el proyecto de resolución fue sancionado por la persona titular de la Presidencia Municipal se

convocó a sesión del Ayuntamiento para el análisis de la misma, junto con el expediente materia de estudio.

2. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA

Este H. Ayuntamiento es competente para conocer y resolver en definitiva el presente recurso administrativo de revisión, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 28, fracción XXXI, 195, fracción V, 198, 199 y 203, fracción VI, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 257, 258, 265 y 266 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua y 261 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, por tratarse de una resolución dictada dentro de un procedimiento instaurado con motivo de la aplicación de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.

3. REQUISITOS DE PROCEDENCIA

3.1 Forma. El recurso fue presentado por escrito cumpliendo con los requisitos a que alude el artículo 260 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.

3.2 Oportunidad. La presentación del recurso fue realizada en tiempo, dentro del plazo de 15 días establecido en el artículo 203, fracción II del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 259 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua.

3.3 Personalidad y legitimación. La persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. se encuentra legitimada para interponer el medio de defensa en estudio ya que las medidas de seguridad dictadas dentro de la resolución definitiva recaída y contenida en el expediente **JI-065/17**, afectan su esfera jurídica, mientras que su representante acreditó que comparece válidamente en nombre de dicha moral, por lo que se cumple lo dispuesto en el artículo 203, fracción I del Código Municipal para el Estado de Chihuahua y 259 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua.

4. PLANTEAMIENTO DEL CASO

El día 25 de junio del 2015, se presentó ante la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, denuncia en contra de los desarrolladores de los Fraccionamientos (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o

identificable.) II y (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) III, mediante el cual expone diversas violaciones a la normativa de Desarrollo Urbano y Ecología derivado de la ejecución de obras de construcción de dichos fraccionamientos por el depósito de material que invade y afectan sus propiedades, solicitando a la Dirección realice las inspecciones conducentes y aplique las medidas correctivas y sanciones correspondientes.

Con fecha 08 de agosto del 2016, se dictó resolución del Recurso Administrativo de Revisión número RA 050/2015, mediante el cual ordena a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología Municipal, determine si existe infracción a la normatividad aplicable en materia de desarrollo urbano e imponer las sanciones que correspondan en su caso, cumpliendo las formalidades esenciales del procedimiento.

Con fecha 29 de septiembre del 2017, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología emitió orden de visita de inspección en cumplimiento a lo ordenado en la resolución del Recurso Administrativo RA 050/2015, con el objeto de realizar las diligencias administrativas previstas en diversos ordenamientos aplicables en materia de Desarrollo Urbano.

En fecha 15 de noviembre del 2017, se dictó resolución definitiva del procedimiento administrativo radicado dentro del expediente número JI-065/2017, mediante la cual se imponen diversas medidas de seguridad consistentes en ordenes de limpieza de predios y construcción de muro de contención en los Fraccionamientos (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II y III y multa a las personas morales responsables.

Inconforme con dicha resolución, en fecha 08 de diciembre del dos mil diecisiete, se presentó escrito signado por el C. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), en su carácter de apoderado legal de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A. DE CV., con la finalidad de interponer recurso de revisión administrativa.

Dicho recurso fue radicado bajo número de expediente RA02/2018, resuelto el 08 de julio del 2019 y aprobado en la sesión ordinaria del H. Ayuntamiento verificada el día 10 de julio del 2019, mediante la cual se determinó:

> *"PRIMERO.- El medio de impugnación intentado, consistente en el Recurso Administrativo de Revisión es el correcto para combatir el acto impugnado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 257 de la Ley de Desarrollo Sostenible del Estado de Chihuahua.*
>
> *SEGUNDO.- De oficio se decreta la nulidad de todo lo actuado a partir del Acta de Verificación Física con número de folio 1401, realizada a las once horas con cinco minutos del día dos de octubre de dos mil diecisiete, por la Lic. Patricia García Jasso, Inspectora Adscrita a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología en virtud de las razones expuestas en el considerando SEXTO de la presente resolución"*

Mediante oficio SAUI-903/2019 emitido por el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, se ordenó la reposición del procedimiento administrativo en contra de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A. DE C.V., así como la realización de levantamiento topográfico, el cual se llevó a cabo el 28 de octubre del 2019.

Derivado del levantamiento topográfico citado, con fecha 11 de diciembre de 2019, se emitió memorándum número SPU/TOP/260/2019, emitido por el Jefe de Oficina de Topografía Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual rinde informe del levantamiento topográfico, al cual recayó acuerdo de fecha 16 de diciembre del 2019, donde se tiene por recibida la diligencia citada, ordenándose la notificación personal a las partes, concediéndoles el plazo de cinco días hábiles para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan pruebas.

El 22 de junio del 2020 la Dirección emitió resolución administrativa dentro del procedimiento JI 065/2017 mediante la cual se ordenó el retiro del material depositado y ejecute todas las obras necesarias para contener los rellenos del material y evitar su corrimiento y derrumbe en un plazo de 20 días hábiles, respecto de la cual la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A. DE C.V. promovió recurso administrativo de revisión.

5. SINTESIS DE AGRAVIOS

Del estudio del escrito presentado por el recurrente, se desprende que argumenta como motivos de disenso, los siguientes:

Agravio primero. Violación a las formalidades esenciales el procedimiento y el debido proceso, con motivo de la ilegalidad de diversas actuaciones y notificaciones de carácter personal.

Agravio segundo. Falta y/o indebida fundamentación de la competencia de la autoridad al emitir el acto administrativo que se reclama.

Agravio tercero. El recurrente solicita la inaplicación de los artículos 228 a 252 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, ya que, según su dicho, los mismos no prevén plazos o temporalidad para el ejercicio de la facultad sancionadora ejercida por la autoridad.

Agravio cuarto. Indebida acumulación de acciones

Agravio quinto. El recurrente se duele de transgresiones cometidas durante la susbstanción del procedimiento, en específico el levantamiento topográfico efectuado el día 28 de octubre de 2019 y el acta levantada.

Agravio sexto.- Se argumentan diversas violaciones formales cometidas, de acuerdo al recurrente, al momento de que la autoridad pronunció su resolución, pero que no atañen directamente al fondo de la cuestión debatida.

6. ESTUDIO DE FONDO

Una vez delimitada la controversia, se procede a estudiar los agravios en el mismo orden en que fueron expuestos por el recurrente.

6.1 A lo largo de su primer agravio, y de manera parcial en sus agravios quinto y sexto, el recurrente alega la ilegalidad de diversas actuaciones y notificaciones personales, bajo el argumento de que en dichos actos no se cumplieron las formalidades previstas en el artículo 134, párrafos primero y segundo del Código de Procedimientos Civiles, agravio que se tiene por INFUNDADO, por las razones que se expresan a continuación.

El recurrente invoca la ilegalidad respecto de las actuaciones y notificaciones que se describen a continuación:

1. Citatorio y la cédula de notificación de días 21 y 22 de octubre de 2019, respectivamente, relativa a los oficios SAVI-902/19 Y SAVI-303/19, el primero para dar a conocer el oficio de comisión expedido a favor de las Lics. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y/o (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene

datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.); el segundo para informar acerca de la realización de levantamiento topográfico en los predios materia de la controversia, dejando al arbitrio de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V., el presentarse o no.

2. Citatorio y la cédula de notificación de días 12 y 13 de febrero de 2020, respectivamente, relativa a acuerdo de fecha 16 de diciembre de 2019, el memorándum SPU/TOP/260/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019 que contiene el levantamiento topográfico, así como el acta circunstanciada y el acta de verificación física 08240 del 28 de octubre 2019, con el propósito de conceder a la moral 5 días hábiles para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto de dichos documentos.

3. Citatorio y la cédula de notificación por instructivo de fechas 25 y 26 de junio de 2020, respectivamente, relativas a la resolución administrativa dictada dentro del procedimiento JI-64/2017, de fecha 22 de junio de 2020.

Se afirma que no le asiste la razón al recurrente, toda vez que dentro de sus agravios expone una serie de omisiones por parte de la autoridad, tomando como base los dos primeros párrafos del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles, los cuales resultan aplicables a la notificación de la demanda, es decir, el emplazamiento.

El emplazamiento constituye el acto procesal por medio del cual se hace del conocimiento del demandado la existencia de una demanda instaurada en su contra, proporcionándole la posibilidad legal para que oportunamente pueda apersonarse y producir su contestación.

Debido a la importancia de ese acto procedimental, a través del cual las autoridades jurisdiccionales cumplen en un proceso, o, en un procedimiento seguido en forma de juicio, con el derecho de audiencia y debido proceso reconocidos en los artículos 14 y 16, de nuestra Constitución Política, es que los requisitos a cumplirse son mayores.

En el Código de Procedimientos Civiles se plasma esa diferencia, pues el artículo 134 se divide en 5 párrafos, siendo que los primeros 4 establecen los requisitos que se deben de cumplir cuando se está frente a la notificación de la demanda, a saber:

a) Obligación de cerciorarse que el domicilio corresponde al de la persona buscada, debiendo asentarse las circunstancias y medios que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio.

b) En caso de que en la primera búsqueda no se encuentra a la parte interesada, se debe dejar un citatorio para hora fija dentro del día hábil siguiente.

c) El citatorio debe contener: a) el nombre de la persona a quien se cita, b)el día y la hora en que debe esperar la notificación, c)el sello correspondiente para autorizar el citatorio por la o el notificador.

Luego, el segundo párrafo del artículo 134 establece el actuar de los notificadores para el caso de que la persona que debe ser notificada no atienda al citatorio, debiéndose practicar el emplazamiento por medio de instructivo que se entregará a parientes, empleados o empleadas de la persona interesada o a cualesquiera otra persona que se encuentre en el domicilio y, en caso de no atender nadie, se fijará en la puerta donde se actúa, de todo lo cual se asentará razón en las diligencias.

El tercer párrafo del artículo en análisis dispone que al instructivo se agregará copia de la demanda y sus anexos, así como de la resolución que se notifica. Mientras que el cuarto párrafo dispone el actuar de los notificadores para el caso de que no se les permita el acceso al domicilio del a persona a notificar, por tratarse de fraccionamiento, parque industrial, condominio u análogos.

No obstante, todas y cada una de las notificaciones y citatorios de los que el recurrente se duele bajo el argumento de que no contienen los elementos descritos en los primeros dos párrafos del numeral 134 del Código de Procedimientos Civiles, no versan sobre la primera notificación dentro del expediente administrativo JI-065/17, cuya resolución se recurre, sino que lo que se notificó fueron diversos actos de autoridad emitidos durante la secuela procesal del procedimiento administrativo iniciado por la autoridad derivado de denuncia popular, como lo son:

- El oficio a través del cual se ordena la práctica de verificación física y levantamiento topográfico en los predios materia de la controversia.

- El Acuerdo dictado el 16 de diciembre de 2019, que tiene por recibido el memorándum SPU/TOP/260/2019 de fecha 11 de diciembre de 2019 que contiene el levantamiento topográfico, así como el acta circunstanciada y el acta de verificación física 8240 del 28 de octubre 2019, con el propósito de conceder a la moral 5 días hábiles para manifestar lo que a su interés conviniera, respecto de dichos documentos.

- La resolución recaída al procedimiento administrativo.

Los actos en mención, definitivamente no constituyen el primer llamado al procedimiento, es decir no son un emplazamiento, por lo que resulta incuestionable que en la especie, los primeros cuatro párrafos del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles no se aplican supletoriamente a los actos y notificaciones impugnados, sino que en todo caso la supletoriedad respecto de las notificaciones personales, opera en torno al contenido del último párrafo del referido arábigo 134, relativo a las *demás* notificaciones personales, es decir, todas aquellas distintas al emplazamiento.

Ahora, se procederá a analizar el contenido del precepto que en la especie resulta aplicable, es decir, el último párrafo del artículo 134 de Código de Procedimientos Civiles, el cual dispone:

> ...
>
> *Las demás notificaciones personales se harán a la persona interesada, o a su representante o procurador, en el domicilio designado al efecto; y no encontrándolo el notificador, sin necesidad de nueva búsqueda, le dejará un instructivo en el que hará constar la fecha y hora en que la entrega, el nombre y apellido de la parte promovente, el tribunal que manda practicar la diligencia, la determinación que se manda notificar y el nombre y apellido de la persona a quien entrega, recogiéndose la firma en la razón que se asentará del acto. Si ésta no supiere o no quisiere firmar, se hará constar esta circunstancia.*

De este precepto se desprende que las notificaciones personales que no se refieren al emplazamiento deben realizarse:

a. *A la persona interesada, o a su representante o procurador*
b. *En el domicilio designado al efecto*
c. *Si no se encuentra a la persona o su representante, se dejará instructivo, sin necesidad de nueva búsqueda,*
d. *El instructivo debe contener:*
    i. *la fecha y hora en que la entrega*
    ii. *nombre y apellido de la parte promovente*
    iii. *el tribunal que manda practicar la diligencia*
    iv. *la determinación que se manda notificar*
    v. *nombre y apellido de la persona a quien entrega*
    vi. *Firma de quien recibe, salvo que no haya querido o no supiere firmar, haciéndose constar dicha circunstancia.*

En el caso concreto, resulta claro que las tres notificaciones impugnadas cumplen los requisitos establecidos en el último párrafo del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles, debiéndose también realizar las siguientes consideraciones en torno a las mismas.

Chihuahua capital de trabajo y resultados Gobierno Municipal 2021-2024

El recurrente también se duele de la violación al artículo 232, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible y 295, fracción II, del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, en torno a la notificación del levantamiento topográfico cuya realización se hizo del conocimiento del recurrente mediante actos de fechas 21 y 22 de octubre de 2019.

Al respecto, debe de aclararse que dicho levantamiento topográfico fue realizado en predios propiedad de los CC (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), así como de los CC. (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), motivo por el cual la moral quejosa no hace las veces de "visitada" por lo que los requisitos exigidos por el artículo 232, fracción II de la Ley de Desarrollo Urbano y Ecología, así como el diverso 295, fracción II, del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible, no le resultan aplicables, pues como se desprende del oficio SAUI-903/19, la presencia de los representantes legales de la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. era optativa.

Además, del acta circunstanciada de fecha 28 de octubre del 2019 y que obra a fojas 593, 594 y 595 del expediente, se advierte que el representante legal de la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. compareció a la diligencia de levantamiento

topográfico realizado por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del municipio de Chihuahua, donde se le tuvo haciendo manifestaciones a nombre de su representada.

En consecuencia, es evidente que el recurrente fue debidamente notificado y que tuvo conocimiento de los oficios SAUI-902/19 Y SAUI-303/19, ya que con la comparecencia al levantamiento topográfico de fecha 28 de octubre del 2019 se convalida la notificación impugnada, efectuada el 22 de octubre de 2019, y por tanto, contrario a lo que afirma el recurrente, no se le dejó en estado de indefensión, por lo que sus agravios resultan infundados.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Novena Época, bajo número de registro 201150, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IV, Octubre de 1996, página 533:

> ***"EMPLAZAMIENTO A PERSONA MORAL, SE CONVALIDA SI SU APODERADO COMPARECE A LA AUDIENCIA DE LEY EN CALIDAD DE DEMANDADO COMO PERSONA FISICA.*** *Si el apoderado de una persona moral comparece como persona física demandada al desahogo de la audiencia de pruebas a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo, dentro de un juicio en el que también es demandada la persona moral que representa, el ilegal emplazamiento a ésta se convalida y surte sus efectos como si estuviere legalmente hecho por haber tenido su apoderado conocimiento del juicio desde el momento en que compareció a la audiencia.*

Chihuahua capital de trabajo y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

Del criterio transcrito, se desprende que si tratándose de la notificación de la demanda, la sola comparecencia del apoderado convalida el ilegal emplazamiento, con mayor razón dicho razonamiento debe ser aplicado al caso concreto, pues como ya se ha explicado el acto a notificarse no se trató de la demanda sino del anuncio de que se llevaría a cabo un levantamiento topográfico, al cual se presentó el representante legal de la moral recurrente, razón por la cual; suponiendo, sin conceder, que la notificación se hubiere practicado sin cumplir los requisitos de ley, la sola comparecencia convalida dicha notificación.

Luego, en cuanto a la notificación practicada el día 13 de febrero, como ya se había afirmado tampoco se trata de un emplazamiento, sino del cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua[1], motivo por el cual no le resultan aplicables, en forma supletoria,

[1] Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas que sean necesarias, fundando y motivando el requerimiento y, para que, dentro del término de cinco días hábiles a partir del día siguiente hábil de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.

las formalidades previstas en el numeral 134 del Código de Procedimientos Civiles.

No debe perderse de vista que, de acuerdo al contenido del artículo 237 la notificación del acta de inspección que se realiza al interesado, en este caso el recurrente, para que manifieste lo que a su derecho convenga se puede efectuar mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, habiendo optado en este caso la autoridad por una notificación personal, la que como ya quedó establecido fue practicada cumpliendo lo señalado en el último párrafo del artículo 134 de Código de Procedimientos Civiles.

El recurrente señala también la ilegalidad del citatorio y cédula de notificación por instructivo de fechas 12 y 13 de febrero del 2020 bajo el argumento de que no se requirió la presencia de (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., sino que se realizó en busca del representante legal de la misma, circunstancia que contrario a lo expuesto por el recurrente resulta válida, pues es de explorado derecho que entre las formalidades que deben cumplirse con relación a la notificación realizada a la persona moral, el actuario, al constituirse en su domicilio, deberá requerir la presencia del representante legal[2].

Así es, de la lectura de la cédula de notificación en mención, se desprende que la misma fue realizada de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, y que se requirió al apoderado o representante legal (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), carácter que ostentó y se le reconoció en el acta circunstanciada de fecha 28 de octubre del 2019, mediante la cual se llevó a cabo el levantamiento topográfico.

Bajo este contexto, al comparecer el C. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) como representante legal de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de

---

[2] Resulta aplicable *mutatis mutandis* la siguiente tesis, la cual versa sobre materia fiscal, tema en torno al cual se suelen exigir mayores requisitos. **NOTIFICACIONES EN MATERIA FISCAL. FORMALIDADES QUE DEBEN CUMPLIRSE EN TRATÁNDOSE DE PERSONAS FÍSICAS Y MORALES.** Registro electrónico 175533, Tribunales Colegiados de Circuito, **Novena Época**, **Tesis:** VII.2o.C.9 A, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 2053

Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., en diligencia previa, es legal el proceder del notificador de requerir su presencia como representante legal de la moral y al no encontrarse este presente, realizar la diligencia con la persona que se encuentre, como se hizo, a través de la C. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), personal del área jurídica.

Sobre esto último, se debe destacar que la recurrente en su escrito de agravios niega que la persona que recibió dicha notificación (C. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.)) sea representante legal y/o empleada y/o asistente del área jurídica y/o cualquier otra relación con la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V.,

No obstante, dado que los notificadores gozan de fe pública y ante la negativa lisa y llana de la recurrente de conocer a la persona que recibió la notificación, la carga de la prueba le corresponde al recurrente, sin embargo, de las pruebas ofrecidas por el mismo, no se desprende ninguna que desvirtué el dicho del notificador ni acredite que la C. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), no es representante legal y/o empleada y/o asistente del área jurídica y/o cualquier otra relación atribuible con (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., motivo por el cual dicha notificación debe prevalecer, al no poder destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir por no haberse desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio idóneo.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio de jurisprudencia emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito, de la novena época, bajo el número de registro 164296, en materia común, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, página 1812:

> ***"NOTIFICACIONES. CORRESPONDE AL PARTICULAR ACREDITAR CON ALGÚN MEDIO PROBATORIO QUE LA DILIGENCIA RELATIVA NO SE LLEVÓ***

> ***A CABO EN EL DOMICILIO CORRECTO O CON LA PERSONA ADECUADA, EN VIRTUD DE QUE EL NOTIFICADOR GOZA DE FE PÚBLICA Y SUS ACTOS SE PRESUMEN VÁLIDOS.*** *En virtud de que los notificadores gozan de fe pública, la simple manifestación del particular de que la diligencia fue irregular porque no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada, contrario a lo circunstanciado en el acta respectiva, no puede destruir la presunción de validez de tal actuación, por lo que la notificación debe subsistir cuando no es desvirtuado el dicho del notificador con algún medio probatorio, máxime que el principio ontológico de la prueba señala que lo extraordinario es lo que se prueba, pues lo ordinario se presume, admite y acepta, tal como lo ordena el artículo 83 del Código Federal de Procedimientos Civiles al expresar que "El que funda su derecho en una regla general no necesita probar que su caso siguió la regla general y no la excepción; pero quien alega que el caso está en la excepción de una regla general, debe probar que así es.". Por tanto, corresponde al particular desvirtuar el dicho del notificador demostrando con las pruebas conducentes, que la diligencia no se llevó a cabo en el domicilio correcto o con la persona adecuada.*

A mayor abundamiento, se debe agregar que como ya se había señalado líneas atrás la recurrente compareció por conducto de su representante legal al levantamiento topográfico el día 28 de octubre del 2019, acto notificado el día 22 de octubre, precisamente a través de la C. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), quien en dicha ocasión también manifestó ser personal del área jurídica de la persona moral requerida, sin que para ese acto la recurrente haya negado que dicha persona funja como empleada y/o asistente del área jurídica y/o cualquier otra relación atribuible con (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V

Por lo que toca a la notificación de la resolución dictada en el expediente JI-065/17, se sostiene que esta se realizó en los términos que dispone el último párrafo del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles; y, suponiendo, sin conceder, que no haya sido así, el hecho de que la recurrente haya promovido el recurso que hoy se resuelve basta para tenerla por sabedora del acto notificado, por lo que la notificación que se pretende tildar de ilegal se convalida con la presentación del escrito de fecha 17 de julio de 2020.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio emitido por Tribunales Colegiados de Circuito bajo el número de registro 216678, publicado en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, abril de 1993, página 277:

NOTIFICACIONES IRREGULARES EN EL AMPARO. LAS CONVALIDAN LAS MANIFESTACIONES EN EL JUICIO QUE REVELEN EL CONOCIMIENTO DE LAS MISMAS. *El artículo 320 del Código Federal del Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, dispone que: "... si la persona mal notificada o no notificada se manifestare ante el tribunal sabedora de la providencia, antes de promover el incidente de nulidad, la notificación mal hecha u omitida surtirá sus efectos, como si estuviera hecha con arreglo a la ley"; así que, si la parte notificada indebidamente en el juicio de amparo, se ostenta sabedora del acuerdo, asunto o proveído objeto de la notificación, cuando ejercita algún acto procesal con posterioridad a la diligencia ilegítima, realizado dicho acto, se convalida la notificación ilegal, pero siempre que dicho acto revele el conocimiento de la actuación materia de la notificación.*

Por todo lo anteriormente expuesto, al tratarse de actos procesales que se deben notificar de manera personal distintos al emplazamiento y que fueron realizados de conformidad a lo dispuesto por el último párrafo del artículo 134 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua y al haberse convalidado la notificación a través de las distintas actuaciones mediante las cuales se hizo sabedor el recurrente del acto notificado, se declara infundado el agravio primero.

6.2 Se califica como INFUNDADO el agravio segundo, a través del cual el recurrente se duele de la falta y/o indebida fundamentación de la competencia de la autoridad al emitir el acto administrativo que se reclama atendiendo a la inexistencia de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología.

Para explicar lo infundado de su pretensión, conviene en primer término transcribir el contenido de los tres primeros párrafos del artículo 60 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua:

> *ARTÍCULO 60. El municipio, para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para auxiliar en sus funciones a la persona titular de la Presidencia Municipal, de acuerdo con sus posibilidades económicas y sus necesidades, podrá contar con las siguientes dependencias:*
>
> *I. Secretaría;*
> *II. Tesorería;*
> *III. Oficialía Mayor;*
> *IV. Dirección de Servicios Municipales;*
> *V. Dirección de Seguridad Pública o Comandancia de Policía;*
> *VI. Dirección de Obras Públicas;*
> *VII. Dirección de Desarrollo Rural;*
> *VIII. Dirección de Desarrollo Urbano;*
> *IX. Dirección de Fomento Económico Municipal.*
> *X. Dirección o Departamento de Ecología; y*

XI. Dirección de Educación y Cultura.

XII. Administración de la Ciudad, tratándose de aquellos municipios que cuentan con una población igual o mayor a cien mil habitantes.

Cuando las posibilidades económicas de un municipio no lo permitan, o sus necesidades no requieran el funcionamiento de todas las dependencias señaladas en este artículo, por acuerdo del Ayuntamiento podrán encomendarse dos o más ramos de la administración municipal a cada titular, sin que por ello tengan derecho a percibir otro sueldo que el asignado en el presupuesto, por el ejercicio de la función pública en uno solo de los ramos encomendados; asimismo, los Ayuntamientos podrán crear las dependencias que sean necesarias. Los municipios que cuenten sustancialmente con población indígena, procurarán establecer una Dirección que se encargue de la atención específica de sus asuntos.

Las funciones para el despacho de los asuntos de competencia municipal, se regirán por lo dispuesto en este Código y el Reglamento Interior de cada Municipio.

...

Del contenido del precepto invocado, se desprende que el Código que regula el actuar de los municipios en el Estado de Chihuahua, otorga a los municipios la facultad potestativa de contar con las dependencias enumeradas a lo largo de dicho precepto, atendiendo a sus posibilidades económicas y las necesidades propias de la comunidad.

Lo anterior se afirma pues, es de explorado derecho que el uso del término "podrá" denota la potestad que el legislador otorga al sujeto de la norma, en este caso, los municipios, para que de acuerdo a su libertad de apreciación, actúen o se abstengan de obrar en el sentido mencionado; por lo que queda a su arbitrio la decisión de ejercer o no tal prerrogativa, en este caso la relativa a contar con determinada estructura orgánica para el estudio, planeación y despacho de los asuntos del orden administrativo.

Esta facultad potestativa se confirma además, con la redacción del segundo párrafo del precepto en análisis, ya que de manera expresa establece que en caso de que por circunstancias económicas o derivado de las necesidades propias del municipio es posible encomendar dos o más ramos a cada titular.

Por último, dado que la administración municipal se encuentra inmersa en una estructura jurídica legislativa piramidal, no necesariamente rígida, que tiene su origen y fundamento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; el tercer párrafo dispone que las funciones de las dependencias con que el

municipio cuente se rigen por lo dispuesto en el Código Municipal y en el Reglamento Interior de cada uno de ellos.

De lo expuesto, resulta claro que la afirmación del recurrente en el sentido de que la autoridad resolutora, en este caso, la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, no existe jurídicamente por que el Código Municipal no la menciona expresamente no es acertada, pues es este mismo ordenamiento el que enumera las posibles direcciones que pueden formar parte de la administración pública municipal, pero a la vez señala la facultad de cada municipio de fusionar dichos ramos en una sola dependencia.

En la especie, es la fracción VIII la que habla de la Dirección de Desarrollo Urbano, mientras que la X se refiere a la Dirección o Departamento de Ecología, materias que de acuerdo a las necesidades del municipio de Chihuahua se decidieron integrar en una sola Dirección, en estricto apego a lo contemplado en el artículo 60, párrafo segundo del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Dicha unión de las materias relativas al desarrollo urbano y la ecología en una sola dependencia, queda plasmada en el artículo 28, fracción IV y 69 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, ordenamiento válido para realizar dicha integración, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 60, párrafo segundo, del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, así como al esquema regulatorio que caracteriza al municipio en México, el cual se contiene en una serie de disposiciones jurídicas que figuran en ordenamientos de diversos niveles que regulan dicha unidad básica de división territorial y organización administrativa.

Bajo este contexto, resulta claro que las afirmaciones del recurrente, en el sentido de que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología es inexistente ante la falta de fundamento que permita una fusión y el trabajo conjunto de varios ramos, bajo la dirección de una sola persona, son infundadas.

Ahora bien, por lo que toca a lo manifestado por el recurrente en el sentido de que la autoridad fue omisa en fundamentar su ámbito de competencia, también se estiman infundadas por las razones que se expondrán a continuación, previo análisis del marco jurídico que regula la competencia de las autoridades administrativas y su fundamentación.

La garantía de debida fundamentación dentro de los actos de molestia a que se refiere el artículo 16 constitucional, se ve satisfecha en cuanto a la competencia de la autoridad administrativa cuando el documento que contenga el acto de molestia invoque las disposiciones legales, acuerdo o decreto que le otorgan facultades a la autoridad emisora para emitirlo.

La competencia de los órganos administrativos radica en el conjunto de atribuciones o facultades que le incumben a cada uno de ellos, las cuales se

encuentran establecidas en disposiciones legales que delimitan su campo de acción y generan certeza a los gobernados sobre los órganos del Estado que pueden válidamente afectar su esfera jurídica. A su vez, la competencia de las autoridades administrativas se fija siguiendo tres criterios: por razón de materia, por razón de grado y por razón de territorio.

En el caso a estudio, se advierte que en cada uno de los actos de molestia emitidos por la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología la autoridad precisó los fundamentos legales en que apoyó su actuación.

Así, en el oficio SAUI-902/19, relativo a la comisión que se asignó a las Lics. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y/o (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), documental visible en a fojas 80 y 312 del expediente en análisis, se aprecia claramente que el Director de Desarrollo Urbano y Ecología, invocó los artículos 16 y 115, fracciones II, III, inciso g, V, incisos d y f de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 11, fracción XVIII y 72, fracciones I, II, IV y XI del Código Municipal del Estado de Chihuahua; 69, fracciones I, II, III, X, XII, XV, XVII y XIX y 109 del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua; 5, fracción XVI, 6, fracción IV, 10, fracciones IV, IX, inciso a, XXIII y XXVII, 141, 142, fracción X, 230, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239 y 240 de la Ley de Desarrollo Urbano sostenible del Estado de Chihuahua; en relación con los artículos 1, fracción VI, 2, fracciones LXX, 3, 5, fracciones III, IV, VI,VII,VIII, X y XII, 15, 16, 46, fracciones I, II y III, 47 del Reglamento de Construcciones y Normas Técnicas del Municipio de Chihuahua.

De esta manera, resulta claro que la autoridad citó de manera precisa y exhaustiva los fundamentos legales que determinan su competencia por razón de materia, grado y territorio para los efectos de comisionar a las inspectoras adscritas a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología a efecto de practicar las notificaciones a la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. y la diligencia consistente en el levantamiento topográfico.

Por lo que toca al oficio SAUI-903/19, documental visible a fojas 081 del tomo I a través del cual se le notifica a la recurrente la práctica del levantamiento topográfico a efectuarse en los predios que se ubican en la fracción I de la parcela

(ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) zona 3, polígono 1/7 del Ejido (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), propiedad de (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), y fracción I de la parcela (ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), zona 1, polígono 7/7 del mismo ejido, propiedad de (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), se debe destacar que el mismo no se constituye en un acto de molestia para la moral recurrente, dado que dicha diligencia no fue realizada en predios de su propiedad, sino que únicamente se le informó la práctica de la misma, para el caso de que fuera su deseo concurrir.

En cuanto al acta circunstanciada y el acta de verificación física, ambas levantadas el día 28 de octubre de 2019, la primera con el propósito de dar cuenta de los hechos relativos al levantamiento topográfico efectuado a través de la segunda, su análisis se realizará mediante el estudio del agravio quinto pues los argumentos esgrimidos en el mismo giran en torno a dicho actos en particular.

Por lo anteriormente expuesto, se arriba a la conclusión de que, tal como se había anunciado, el agravio segundo es INFUNDADO al encontrarse acreditado que la autoridad actuó dentro del marco de sus atribuciones y que los actos se encuentran debidamente fundados en torno a su competencia.

6.3 Dentro del agravio tercero, el recurrente solicita la inaplicación de los artículos 228 a 252 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, ya que, según su dicho, los mismos no prevén plazos o temporalidad para el ejercicio de la facultad sancionadora ejercida por la autoridad.

Estas manifestaciones se califican como INFUNDADAS por las razones que se expondrán a continuación.

Para dar respuesta a la pretensión del quejoso, en torno al control difuso solicitado, se debe partir de la base de que de acuerdo al nuevo paradigma de derechos humanos, derivado del Expediente Varios 912/2010, así como de la reforma constitucional del 10 de junio de dos mil once, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad; mientras que las normas relativas a los derechos humanos se deben interpretar de conformidad con la propia Constitución federal y con los tratados internacionales favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

A su vez, el Pleno de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que, si bien se cuenta con la posibilidad de inaplicar normas, se debe partir de la presunción de su validez, por lo cual, al realizar el control de la convencionalidad se deben aplicar, de conformidad con la tesis de clave **P. LXIX/2011(9a.)**, de rubro **PASOS A SEGUIR EN EL CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD Y CONVENCIONALIDAD EX OFFICIO EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS**, los siguientes pasos:

• **Interpretación conforme en sentido amplio**, lo que significa que los jueces del país -al igual que todas las demás autoridades del Estado Mexicano-, deben interpretar el orden jurídico a la luz y conforme con los derechos humanos, reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales en los cuales el Estado Mexicano sea parte, favoreciendo, en todo tiempo, a las personas con la protección más amplia.

• **Interpretación conforme en sentido estricto**, lo que significa que cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, los jueces deben, partiendo de la presunción de constitucionalidad de las leyes, preferir aquella que hace a la ley acorde a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados

internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, para evitar incidir o vulnerar el contenido esencial de estos derechos.

• **Inaplicación de la ley cuando las alternativas anteriores no son posibles**. Lo anterior no afecta o rompe con la lógica de los principios de división de poderes y de federalismo, sino que fortalece el papel de los jueces al ser el último recurso para asegurar la primacía y aplicación efectiva de los derechos humanos establecidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte.

Ahora bien, el recurrente solicita se realice el control difuso de constitucionalidad respecto de los artículos 228 al 252 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible por no contemplarse en dicho ordenamiento un plazo para que la autoridad municipal ejerza su facultad sancionadora, es decir establece de manera general 24 artículos, que abarcan temas tales como la denuncia popular, el procedimiento administrativo, las inspecciones, las medidas de seguridad, las infracciones y las sanciones, pero sin especificar cuál de los preceptos se debería de inaplicar para salvaguardar el orden constitucional.

Luego, el recurrente motiva su petición bajo el argumento de que dichos preceptos se encuentran en conflicto con los derechos humanos consagrados en el bloque de constitucionalidad; y, de lo que expone se infiere que el derecho que aduce como violentado es el relativo al acceso a la jurisdicción, cuyo fundamento se encuentra en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[3], así como en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, conforme al cual corresponde al Estado impartir justicia a través de las instituciones y procedimientos previstos para tal efecto.

Este derecho, a su vez, se desdobla en varios principios, entre ellos el de justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes.

Habiendo identificado el derecho humano que se estima violentado, lo procedente[4] es examinar las posibles **interpretaciones** que la norma permite y verificar si una

---

[3] Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

[4] **Tesis: XXVII.1o.(VIII Región) 15 K (10a.)**, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 3, página 1618, cuyo rubro señala: **CONTROL DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDAD EX OFFICIO. PASOS Y ASPECTOS SUSTANTIVOS E INSTRUMENTALES QUE DEBEN OBSERVARSE PARA REALIZARLO.**

de ellas guarda conformidad con el derecho humano que se estima ha sido transgredido.

En ese sentido, lo primero que hay que apuntar es que nuestro ordenamiento jurídico no es completo ni totalmente coherente, sino que tiene lagunas, ambigüedades e imprecisiones. Bajo esta premisa, se advierte que en el caso concreto el legislador no reguló expresamente un supuesto de hecho específico, en este caso, el plazo con el que cuenta la autoridad para determinar sanciones administrativas.

Para resolver este problema, algunos ordenamientos prevén la figura de la supletoriedad, que implica la acción de suplir una deficiencia o mala regulación de una ley de carácter general con otra de carácter específico, en la que se encuentre regulada la institución o figura a suplir; en este contexto deben existir dos leyes: la ley a suplir y la ley supletoria.

Para la procedencia de la supletoriedad deben satisfacerse los siguientes requisitos: a) Que el ordenamiento que se pretenda suplir la admita expresamente y señale el estatuto supletorio; b) Que el ordenamiento objeto de supletoriedad prevenga la institución jurídica de que se trate; c) Que previendo dicha institución, las normas existentes en el cuerpo a suplir sean insuficientes para su aplicación a la situación concreta presentada, por carencia total o parcial de la reglamentación necesaria; y, d) Que las disposiciones o principios con los que se vaya a llenar la deficiencia no contraríen, de cualquier modo, las bases esenciales del sistema legal de sustentación de la institución suplida.

Chihuahua capital del trabajo y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

En el caso concreto la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en su artículo 240 establece que el ordenamiento supletorio lo será el Código de Procedimientos Civiles, con lo que se cumple el requisito señalado como inciso a) en el párrafo anterior; sin embargo, atendiendo a la naturaleza del Código de Procedimientos Civiles y la materia regulada en el mismo, éste no previene la institución jurídica omisa en la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, es decir el plazo con el que cuenta la autoridad para determinar sanciones administrativas.

Ante este panorama, corresponde realizar una interpretación sistemática, pues en rigor la interpretación de las normas jurídicas no puede hacerse sobre la base del aislamiento de los enunciados, ya que el sentido de las normas no sólo está dado por los términos que la expresan y su articulación sintáctica, sino por su relación con otros ordenamientos. Es decir, las normas jurídicas no pueden ser comprendidas fuera del contexto al que pertenecen; el sentido de un enunciado

normativo muchas veces se ve completado por otros enunciados pertenecientes al mismo ordenamiento o a uno distinto.

En ese sentido, se debe partir de la base de que la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua es un ordenamiento que tiene por objeto, entre otros, establecer los preceptos legales básicos que normen el desarrollo urbano sostenible con la participación de los tres órdenes de gobierno en la atención de los asentamientos humanos, los centros de población y el medio ambiente, por lo que las autoridades competentes, para su aplicación son el Congreso del Estado, el Ejecutivo del Estado, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y los Municipios.

Dentro de las atribuciones que la ley en cita otorga a los municipios, se encuentra evitar el establecimiento de asentamientos humanos irregulares, así como realizar inspecciones e imponer las sanciones y medidas de seguridad de su competencia en la materia.

Luego, para mejor proveer de las actividades a cargo de este orden de gobierno, el Código Municipal para el Estado de Chihuahua, faculta a los Ayuntamientos para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal expedidas por la Legislatura del Estado, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, por lo que en uso de dichas atribuciones fue aprobado por el Ayuntamiento de Chihuahua, en Sesión Ordinaria 17/13 de fecha 05 de septiembre de 2013, el Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua.

Dicho cuerpo normativo dispone en sus artículos 291 a 310 las figuras de la denuncia popular, la vigilancia, medidas de seguridad, infracciones y sanciones; sin embargo, a lo largo de dichos preceptos no se establece el plazo con el que cuenta la autoridad para ejercer su facultad sancionadora.

No obstante lo anterior, el artículo 5 del Reglamento establece que serán de aplicación supletoria a dicho ordenamiento La Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, el Código Municipal, la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley de Planeación, la Ley de Protección Civil, la Ley de Catastro, todos del Estado de Chihuahua, y los reglamentos que de ellos deriven, serán de aplicación supletoria para los casos no previstos en el mismo.

El Código Municipal en su artículo 196, ubicado en el Capítulo I, denominado "Del Procedimiento Administrativo", parte integrante del Título segundo "Defensa jurídica de los particulares", establece que a las notificaciones y términos a que

alude este título se aplicarán en lo conducente, las disposiciones del Código Fiscal del Estado.

Por su parte, el Código Fiscal del Estado señala:

> *Artículo 112. Las facultades de las autoridades fiscales para determinar las contribuciones o los aprovechamientos omitidos y sus accesorios, así como para **imponer sanciones por infracciones** a las disposiciones fiscales, se extinguen y por lo tanto opera su caducidad en el plazo de cinco años contados a partir del día siguiente a aquel en que:*
>
> *...*
>
> *II. Se hubiere **cometido la infracción** a las disposiciones fiscales; pero si la infracción fuese de carácter continuo o continuado, el término correrá a partir del día siguiente al en que hubiese cesado la consumación o se hubiese realizado la última conducta o hecho, respectivamente.*
>
> *Se considera que una infracción es continua cuando en virtud de una única conducta asumida por el infractor, se infringe una norma de carácter fiscal durante todo el periodo en que se considere existe la infracción, sin que dicha conducta se vea modificada; y es continuada, cuando con una pluralidad de actos u omisiones se infringe una misma disposición fiscal en perjuicio de la misma autoridad fiscal, y solo se debe imponer una sanción.*

Bajo este contexto, resulta claro que contrario a lo señalado por el recurrente, los ordenamientos aplicables al caso concreto, si prevén el plazo para ejercer la facultad sancionadora, así como las consideraciones que debe tomar la autoridad para el cómputo del mismo, por lo que los artículos respecto de los cuales solicitaba su inaplicación guardan congruencia con el derecho humano de acceso a la justicia y el principio de justicia pronta, resultando su agravio a todas luces INFUNDADO.

6.4 En su agravio cuarto la recurrente se duele de una indebida acumulación de acciones, bajo el argumento de que en la denuncia que dio inició al procedimiento, recibida en la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología el 25 de junio de 2015, por conducto del Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), se refería únicamente en su carácter de apoderado legal de los CC. (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal:

Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y que con posterioridad, alegando desconocer la fecha exacta, se presentó como apoderado legal de (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.).

Sin embargo, en oposición a lo dicho por el recurrente la denuncia primigenia fue presentada tanto a nombre de los CC. (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), como del C. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), acreditándose debidamente las facultades con que comparecía. Por lo que toca a la C. (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), del contenido del expediente JI-065/17 se advierte que los CC. Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) se ostentaron como sus apoderados, así como de y (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) a partir del día 13 de septiembre de 2019.

De lo anterior, resulta claro que no se trata de dos denuncias diferentes, ni de hechos diferentes, sino que en ambos casos se puso en conocimiento de la autoridad administrativa la ejecución de trabajos de movimientos de tierra llevados a cabo por la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., bajo dos vertientes:

1. Los realizados como parte de las obras de urbanización del fraccionamiento Residencial (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II, colindante con el predio propiedad de (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.).
2. Los efectuados durante el tiempo de urbanización del fraccionamiento Residencial (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) III, colindante a los predios de los CC. (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de

que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.).

De lo anterior se desprende que existe una identidad de acciones y de hechos, aunque las personas sean diversas, atendiendo a que se trata de dos predios con distintos propietarios; por lo que es evidente la conveniencia de presentar una denuncia única y en consecuencia, el proceder de la autoridad de concentrar el asunto planteado en un solo expediente, atendiendo al principio de economía procesal.

Así las cosas, es evidente que contrario a lo expuesto por el recurrente el actuar de la autoridad, consistente en concentrar en un solo expediente el procedimiento administrativo que da origen a la resolución que hoy se impugna, protege los principios constitucionales de justicia expedita, pronta, completa e imparcial, al evitar que se dicten resoluciones contradictorias, por lo que su agravio es INFUNDADO.

6.5 En cuanto a su agravio QUINTO, el recurrente señala como acto administrativo impugnado el acta circunstanciada y acta de verificación física de folio 08240, ambas de fecha 28 de octubre del 2019, mediante las cuales realiza diversos señalamientos y violaciones a lo dispuesto por los numerales 234, 235 y 236 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua; y los artículos 293, 294 y 295 fracciones I y II del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua, y que para efecto del estudio del presente agravio, se analizarán de manera conjunta al tratarse de un mismo acto administrativo, tal como se desprende del acta de verificación física con número de folio 08240, en donde quedó asentado que se anexa acta circunstanciada donde se relata los hechos del levantamiento topográfico y personas que intervinieron en la misma.

La inspección es una de las actividades más importante del estado, ya que a través de la misma se verifica o comprueba el cumplimiento de las normas jurídicas por parte de los particulares. El artículo 230 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua faculta a los municipios en el ámbito de sus competencias para llevar a cabo inspección de supervisión a través del personal debidamente autorizado para vigilar el cumplimiento de la Ley y sus

reglamentos y son los artículos del 232 al 236 de la ley en estudio los que establecen las reglas que deberán seguir los procedimientos de inspección y los elementos que deberá contener el acta respectiva, por lo que debido a su importancia en el presente asunto se transcribe a continuación:

Artículo 232. El personal autorizado, previo a iniciar la inspección, deberá:

I. Corroborar que el área, zona o bien inmueble señalado para efectuar la visita de inspección, coincide con la descrita en la orden dictada para el efecto y asentará en el expediente correspondiente, los medios de que se valió para tal efecto;

II. Requerirá la presencia del visitado o su representante legal; en caso de no encontrarse, se dejará cita de espera a una hora hábil dentro de las veinticuatro horas siguientes para la práctica de la inspección;

III. Cuando no se encuentre persona que reciba el citatorio o encontrándose se niegue a recibirlo, éste se dejará pegado en lugar visible del área, zona o bien que ha de visitarse y, a falta de éste, con el vecino inmediato, y

IV. Si el visitado o el representante legal, no atiende a la cita a que alude la fracción II del presente artículo, se llevará la diligencia con el encargado, cualquier dependiente o con la persona que ahí se encuentre; le exhibirá la orden respectiva y le entregará copia de la misma con firma autógrafa, requiriéndola para que en el acto designe dos testigos.

En caso de negativa o si los designados no aceptan desempeñarse como testigos, no invalidará los efectos de inspección, y el personal autorizado lo hará constar en el acta administrativa y asignará dos testigos.

Chihuahua capital de trabajo Resultados Gobierno Municipal 2021-2024

Artículo 233. La persona con quien se entienda la inspección, estará obligada a permitir al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares sujetos a inspección, en los términos previstos en la orden escrita, así como proporcionar toda clase de información que conduzca a la verificación del cumplimiento de esta Ley y demás disposiciones aplicables.

Artículo 234. La autoridad competente podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para efectuar la visita de inspección, cuando alguna o algunas personas obstaculicen o se opongan a la práctica de la inspección, independientemente de las sanciones a que haya lugar.

Artículo 235. En toda visita de inspección se levantará acta, en la que se harán constar en forma circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen presentado durante la inspección, así como lo previsto a continuación:

I. Nombre, denominación o razón social del visitado;

II. Hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita;
III. Colonia, calle, número, población o municipio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita;
IV. Número y fecha de la orden de visita que la motivó;
V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de inspección;
VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos o su negativa a serlo;
VII. Los datos relativos al área, zona o bien que se inspeccionó, indicando el objeto de la inspección;
VIII. Manifestación del visitado, si quisiera hacerla, y
IX. Firma de los que intervinieron en la inspección.

Artículo 236. Antes de finalizar la inspección, se dará oportunidad a la persona con la que se entendió la diligencia, para que en el mismo acto formule sus observaciones con relación a los hechos u omisiones asentados en el acta respectiva.

Artículo 237. Recibida el acta de inspección por la autoridad ordenadora, se requerirá al interesado, mediante notificación personal o por correo certificado con acuse de recibo, para que adopte de inmediato las medidas correctivas que sean necesarias, fundando y motivando el requerimiento y, para que, dentro del término de cinco días hábiles a partir del día siguiente hábil de la notificación, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con el acta de inspección y ofrezca pruebas en relación con los hechos u omisiones que en la misma se asienten.

Sobre el particular, en cumplimiento a la resolución del Recurso Administrativo RA02/2018, de fecha 10 de julio del 2019, mediante oficio SAUI-903/2019, suscrito por el Ing. Gabriel Martínez Valdez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología, se emitió orden de visita de inspección de levantamiento topográfico en predios propiedad de los CC. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), así como de los CC. (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales

concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) todos de apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), con el finalidad de verificar la existencia o no de depósito de material resultado de la urbanización de dichos fraccionamientos, señalándose para tal efecto las 09:30 horas del día 28 de octubre del 2019, dejando al arbitrio de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V., el presentarse en virtud de que no era la persona sobre la cual iba a recaer la visita.

De la lectura del acta de verificación física número 08240, realizada por el Ingeniero Roberto Rodríguez Espinoza, que se identificó con Gafete Oficial número 16573, y acta circunstanciada levantada por la Lic. Patricia García Jasso, con número de Gafete Oficial 17055, ambas de fecha 28 de octubre del 2019, se desprende que se hizo constar: **I. El nombre, denominación o razón social de los visitados**, dejando asentado en el acta (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), así como (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) y (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) todos de

apellido (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.); **II. La hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita**, quedando asentado como hora de inicio las 09:34 horas y hora de conclusión las 10:34 horas del día 28 de octubre del año 2019; **III. Colonia, calle, número, población o municipio en que se encuentre ubicado el lugar en que se practique la visita**, señalándose la Fracción I de la parcela (ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) Zona 3 polígono 1/7 y Fracción I de la parcela (ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) Zona 1 polígono 7/7, ambas del ejido (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) del municipio de Chihuahua; **IV. Número y fecha de la orden de visita que la motivó,** dejando asentado el oficio de SAUI-903/2019, de fecha 21 de octubre del 2019, emitido por el Ing. Gabriel Martínez Valdez, en su carácter de Director de Desarrollo Urbano y Ecología; **V. Nombre y cargo de la persona con quien se entendió la visita de inspección,** quedando asentado que comparece el Licenciado (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), en su carácter de apoderado legal de los visitados; **VI. Nombre y domicilio de las personas que fungieron como testigos o su negativa a serlo;** quedaron señalados los CC (ELIMINADO: dos palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), los cuales quedaron debidamente identificados con sus credenciales de elector expedidas por el Instituto Nacional Electoral de la cual se desprende su domicilio y obran dentro del expediente a fojas 608, 609, 612 y 613; **VII. Los datos relativos al área, zona o bien que se inspeccionó, indicando el objeto de la inspección,** quedaron señalados por el apoderado legal de los visitados y por el perito topógrafo María de Jesús Prado Calahorra, indicando las colindancias precisas de los predios visitados; teniendo como objeto verificar la

existencia o no de depósito de material resultado de la urbanización, de conformidad a lo ordenado en el oficio SAUI-903/2019. **VIII. Manifestación del visitado, si quisiera hacerla,** se le tuvo por hechas las manifestaciones al apoderado legal de los visitados Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), expresando: "Que se haga constar que se les indicó a todos los presentes las precisas colindancias de la fracción I de la parcela (ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) Zona 3 polígono 1/7 y Fracción I de la parcela (ELIMINADO: tres números. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) zona 1 polígono 7/7, ambas del ejido (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) del municipio de Chihuahua de donde pudieron percibir el material que se encuentra depositado dentro de las mismas y que conforman los taludes". Así mismo, se le tuvo por hechas las manifestaciones al Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), quien manifiesta que "la supuesta afectación no se acredita que sea producto de los fraccionamientos (su urbanización); **IX. Firma de los que intervinieron en la inspección,** de la lectura del acta de verificación y acta circunstanciada se desprende las firmas del personal del Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, el apoderado de los visitados y de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), SA.DE C.V., así como los testigos, firmando los que quisieron hacerlo.

De lo anterior se desprende que los inspectores adscritos a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología cumplieron a cabalidad con todas las formalidades que exige el artículo 235 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, en relación con los artículos 293, 294 y 295 fracciones I y II del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua, al precisar cada uno de los elementos que debe contener el acta que se levante por

motivo de la inspección y atendiendo la diligencia con la persona facultada para tal efecto.

Así mismo, con fecha 16 de diciembre del 2019, el Director de Desarrollo Urbano y Ecología del Municipio de Chihuahua dictó acuerdo donde se tuvo por recibido el memorándum **SPUT/TOP/260/2019,** emitido por el Topógrafo Alberto Herrera Aguirre, Jefe de Oficina de Topografía Urbana de la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología, mediante el cual presenta levantamiento topográfico con anexos, ordenándose la notificación personal a las partes para que se manifiesten lo que a su interés convenga y en su caso ofrezcan pruebas que estimen pertinentes de conformidad a lo dispuesto por el artículo 237 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua, el cual fue notificado a la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A.DE C.V. y no obstante lo anterior, no se inconformó ni hizo uso de su derecho de ofrecer pruebas para robustecer lo manifestado en la inspección de verificación de levantamiento topográfico de fecha 28 de octubre del 2019, ya que de las constancias del expediente se desprende que fue notificado mediante cédula de notificación por instructivo el día 13 de febrero del 2019 y precluyó su derecho el día 20 de febrero del 2019, y al no excepcionarse acepta tácitamente lo actuado durante la visita de inspección.

Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, el criterio de los Tribunales Colegiados de Circuito, de la Séptima Época, en materia Administrativa, bajo número de registro 249904, publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Volumen 169-174, Sexta Parte, página 183, bajo rubro: "**SEGURO SOCIAL. ACTA DE VERIFICACION. EXCEPCIONES EXTEMPORANEAS CONTRA SU CONTENIDO.** Si de acuerdo con los artículos 11, 12, fracción I, 25, fracciones I, III, IV, VI y VII de la Ley del Seguro Social, el Instituto Mexicano del Seguro Social ordenó se practicara visita de verificación a la empresa, la cual arrojó como resultado que se elaboraran los avisos de registro patronal y de inscripción de los trabajadores al sistema de seguridad social, atendiendo al régimen obligatorio que para esa zona se implantaba, la verificación de esos actos no es definitiva, porque de acuerdo con el artículo 20 de la Ley del Seguro Social, la empresa estuvo en aptitud de excepcionarse o plantear alguna duda contra la aludida acta de verificación, pero si no lo hizo, tácitamente los aceptó, y tal conformidad originó que se le diera valor probatorio pleno a la multicitada acta, y que con base en ella, se notificara la liquidación y cobro de cuotas, lo que sí constituye un acto definitivo contra el cual, en términos del artículo 274 de la citada Ley del Seguro Social, sólo procede el recurso aclaratorio y el de inconformidad. Por tanto, si la empresa optó por promover el recurso de inconformidad, no se violan en su perjuicio los

preceptos legales relativos ni mucho menos las garantías que le confieren los artículos 14 y 16 constitucionales, puesto que resulta extemporáneo oponer excepciones contra el contenido de dicha acta de verificación, a través del recurso de inconformidad promovido contra la liquidación y cobro de cuotas obrero-patronales, que precisamente tuvieron como apoyo el resultado de la multimencionada acta de verificación."

Señala el recurrente como agravio la ilegalidad de la notificación de fecha 22 de octubre del 2019 ya que no cumplió con los requisitos exigidos en el artículo 295 fracción II del Reglamento de Desarrollo Urbano Sostenible del Municipio de Chihuahua, agravio que resulta infundado en virtud de tratarse de actos consentidos que quedaron convalidados con la comparecencia del apoderado legal de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) S.A. DE C.V. a la diligencia de levantamiento topográfico del día 28 de octubre del 2019, tal como quedó precisado en el análisis del agravio PRIMERO de la presente resolución.

Señala el recurrente como agravio que el acta circunstanciada inició a las 09:43 horas, cuando en el oficio SAVI-903/2019 se ordena la inspección a las 09:30 horas, lo cual genera una nulidad de ese procedimiento administrativo o inspección. Además, no se asentó al inicio del acta cual era la persona física o moral que visitaba, ni el número de orden de visita que la motivó y la fecha de la misma en franca violación por el artículo 235 fracciones I y IV de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua.

Respecto el agravio señalado, sobre el particular, el artículo 235 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua establece los elementos que deberá contener el acta de inspección, entre ellos la hora, día, mes y año en que se inicie y concluya la visita, así como el número y fecha de la orden de visita que la motivó.

Del análisis de las constancias que obran en los autos del expediente principal, en específico, el acta de verificación física con número de folio 08240, misma que obra a foja 596, se desprende que el inspector se ajustó a las formalidades exigidas en el artículo 235 de la Ley citada, específicamente en lo conducente la hora de inicio de la inspección y orden de visita que la motivó y fecha de la misma, pues tal como consta en el acta de verificación, se precisó que:

> "En la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 09:34 horas del día 28 del mes de octubre del año 2019, el suscrito Ing. I. Roberto Rodríguez E., inspector adscrito a la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología del

Municipio de Chihuahua, identificándome con el Gafete oficial número 16753 expedido por esta Dirección, me constituyo en el domicilio ubicado en la calle----, número------, de la colonia---- de esta ciudad, en el que se describe el lugar predios en forma de dren natural pluvial por motivo de: Otro SAUI-903/19 [....]

De lo anterior se advierte que el inspector asentó en su acta la hora de inicio de la verificación, la cual si bien es cierto no se comenzó a las 9:30 de conformidad a lo ordenado en el oficio SAUI-903/2019, dada la importancia de la materia de planeación y desarrollo urbano, siendo la función estatal que ordena el espacio público y privado para permitir el desarrollo racional de diversas actividades humanas en un espacio físico definido, sin que se generen molestias o daños a terceros, con la finalidad de garantizar derechos constitucionales tales como los relativos a la salud, la seguridad, al agua potable, a un ambiente sano, a una vivienda digna, en aras de otorgar protección y seguridad a la colectividad que se sitúe en zonas urbanas o urbanizables, la misma no se encuentra sujetas a una temporalidad en razón de que la ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua faculta a los municipios de dictar medidas para vigilar su cumplimiento en aras garantizar la protección y seguridad.

Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia de la undécima época emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Segunda Sala, en materia administrativa, bajo el número de registro 2023735, publicada en el Semanario Judicial de la Federación bajo rubro:

"VISITA DE INSPECCIÓN. LA ORDEN EMITIDA PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES EN MATERIA AMBIENTAL DE CONFORMIDAD CON LA LEY GENERAL DEL EQUILIBRIO ECOLÓGICO Y LA PROTECCIÓN AL AMBIENTE, NO REQUIERE LA PRECISIÓN DE UN PERIODO DE REVISIÓN.

Hechos: *Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si las órdenes de inspección en materia ambiental emitidas para verificar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente deben precisar el periodo sujeto a revisión o no, llegaron a posturas opuestas, pues uno consideró que las órdenes de inspección en materia ambiental, emitidas en términos de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, deben contener el periodo en que se va a verificar el cumplimiento de las obligaciones en materia ambiental, a fin de cumplir con el derecho a la seguridad jurídica reconocido por el artículo 16 constitucional; mientras que el otro sostuvo que de dicho ordenamiento legal no se advierte como requisito para emitir la orden de inspección que la autoridad precise el periodo que estará sujeto a revisión.*

Criterio jurídico: *La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que no es requisito de validez de las órdenes de visita de inspección para verificar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente la precisión del periodo sujeto a revisión.*

Justificación: *De conformidad con la legislación aplicable a la materia, tratándose de órdenes de visita emitidas para verificar el cumplimiento de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, no es necesario que se establezca el alcance temporal respecto del cual se verificará el cumplimento de las obligaciones en materia ambiental, pues si la visita tiene como finalidad verificar la existencia de posibles daños al ambiente, tales violaciones no están sujetas a temporalidad alguna, por lo que exigir para la legalidad de la orden de inspección relativa la precisión del alcance temporal o el periodo sujeto a revisión implicaría imposibilitar o impedir el ejercicio de las facultades verificadoras de la autoridad en materia ambiental. Máxime que, en materia de verificación del cumplimiento de las disposiciones que regulan el equilibrio ecológico y la protección ambiental, los bienes jurídicos tutelados son el equilibrio ecológico y el derecho fundamental de la población a gozar de un medio ambiente sano, garantizado en el artículo 4o., párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que para cumplir con el requisito relativo a la precisión del alcance y el objeto de la orden de inspección en materia ambiental, basta con que se establezcan de manera clara y exhaustiva las obligaciones a cargo del sujeto visitado que serán materia de revisión, así como los aspectos y las actividades que efectuará la autoridad durante la inspección, a fin de constreñir a los visitadores a limitar su actuación a lo expresamente señalado en la orden. Es importante precisar que el criterio sostenido por esta Segunda Sala no se refiere a la duración de la visita de inspección, esto es, al plazo en que debe ejecutarse por los visitadores, sino que se circunscribe al alcance temporal del periodo que abarcará la revisión, es decir, el periodo respecto del cual se verificará el cumplimento de las obligaciones en materia ambiental."*

Aunado a lo anterior, el levantamiento topográfico no fue ordenado en predios de la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. DE C.V., por lo que no existe una afectación directa a su esfera jurídica. Por otra parte, en todo momento se le dio vista de las actas, documentos y conclusiones que se derivaron de la inspección de verificación, garantizando el derecho humano del recurrente de audiencia y defensa adecuada. Por lo anterior, se declara infundado el agravio en estudio.

6.6 El agravio identificado por el recurrente como sexto, se califica de INFUNDADO. Sin embargo, derivado de los múltiples argumentos expuestos en el agravio sexto, se indicará la metodología de estudio, atendiendo a los apartados manejados por el propio recurrente.

Lo expresado en los numerales VI, XXIII, XXIV y XXVII no se estudiará por tratarse de hechos relativos a las notificaciones ya estudiados en el apartado 6.1. Por lo que toca a lo expuesto por la recurrente en las fracciones VIII, IX y XXI, versa sobre los documentos emitidos en torno al levantamiento topográfico efectuado el 28 de octubre de 2019, cuyo análisis ya se realizó en el apartado 6.5 de este capítulo.

Se analizará en forma conjunta lo expuesto en los numerales XII, XVII, XIX, XX,XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV por referirse todos a la sanción impuesta o bien a la facultad sancionadora de la autoridad. Se hará también el estudio unido de los apartados X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXVI[5], ya que todos se refieren a una indebida fundamentación o motivación en la resolución de la autoridad.

Los numerales VII, XXII, XXV y XXVIII se analizarán en forma conjunta, por tratarse todos del tema de la valoración de las pruebas. Así mismo, en los apartados III, IV, XXIX y XXX el recurrente expone el tema de la falta de personalidad del apoderado de los propietarios de los predios afectados, por lo que también se estudiarán en forma conjunta.

Numerales II y V versan sobre la litis, mientras que el I toca de manera individual el cumplimiento fuera de término de la reposición del procedimiento. Ahora se realizará el estudio de cada grupo para exponer el por qué los agravios no resultan suficientes para declarar la nulidad de la resolución.

6.6.1 Transcurrió el término de 20 días para reponer el procedimiento, establecido en el artículo 266, tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua.

El agravio en torno a que desde el 26 de agosto de 2019 venció el plazo otorgado a la autoridad para reponer el procedimiento, violentándose así el artículo 266, tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua de acuerdo a la resolución que recayó al recurso R02/2018, dictada el 10 de julio de 2019, es inoperante.

En primer término se debe de aclarar que dado que fue hasta el 10 de septiembre de 2019 que se le notificó a la autoridad recurrida que en los

[5] Relativo a la fundamentación en torno a la competencia, cuyo estudio se anunció en el apartado 6.2 que aquí se realizaría.

diversos recursos administrativos RA03/2018 y RA04/2018 se dictó el sobreseimiento, lo cual resulta relevante por estar dichos medios de impugnación ligados al R02/2018; en todo caso el plazo al que se refiere el artículo 266, tercer párrafo de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible para el Estado de Chihuahua, feneció el 10 de octubre de 2019.

Ahora, si bien es cierto de los autos se desprende que la primera actuación de la autoridad dentro del expediente JI-065/17, con el propósito de reponer el procedimiento fue el 21 de octubre de 2019, también lo es que el cumplimiento extemporáneo de la resolución dictada por una autoridad administrativa, que ordena reponer el procedimiento no es motivo para declarar la nulidad de la determinación dictada en acatamiento de ella.

Lo anterior se afirma, pues aun cuando la inobservancia de la ley constituye una irregularidad en la que la autoridad no debería incurrir, dicha omisión no puede considerarse causa de anulación, ya que esto implicaría, por una parte, otorgar legitimidad a la omisión del funcionario, de cumplir con la obligación emanada de una resolución anterior que lo vincule a realizar un acto o a reforzar un procedimiento y, por otra, al considerar nula la resolución, por el hecho de no haberse cumplimentado el procedimiento dentro del término señalado en la ley, se exoneraría a la autoridad administrativa del cumplimiento de la resolución antecedente y de la ley, al dejar de obedecer la determinación recaída a un recurso o medio de defensa.

Suponer lo contrario, implicaría una contravención a la garantía de plena ejecución de las resoluciones, contenida en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conforme a la cual, tanto los tribunales judiciales como las autoridades administrativas en el ejercicio de sus funciones materialmente jurisdiccionales, tienen la obligación de emitir las resoluciones correspondientes en los litigios planteados ante su jurisdicción, así como dar vigencia y efectividad a dichas resoluciones, procurando su debido cumplimiento, cuestión esta última que, de conformidad con la garantía señalada, es de orden público y de carácter obligatorio.

Sirve de apoyo a lo expresado la tesis con número de registro 186144, emitida por el tercer tribunal colegiado del vigésimo tercer circuito, bajo el númeroXXIII.3o.2 A, de rubro: RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA. EL CUMPLIMIENTO FUERA DEL TÉRMINO LEGAL DE CUATRO MESES, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO ES CAUSA DE NULIDAD DE LA DETERMINACIÓN

DICTADA EN ACATAMIENTO DE ELLA, misma que contendió en la contradicción 100/2002-SS resuelta por la Segunda Sala, de la que derivó la tesis 2a./J. 8/2003, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, febrero de 2003, página 277, con el rubro: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL.".

6.6.2 Omisión de la autoridad de fijar la litis planteada.

El recurrente expone que la autoridad fue omisa en plantear la litis del proceso y en exponer los hechos que generaron el inicio del procedimiento administrativo, argumento que resulta INFUNDADO por las razones que se exponen a continuación.

Por lo que toca a lo señalado en torno a que no se expusieron todos los hechos, la ley de la materia no exige una metodología para el dictado de las resoluciones lo que dota a la autoridad de libertad absoluta en la estructura que decida dar a su sentencia, siempre y cuando la misma este motivada para con ello observar el principio de legalidad que toda resolución judicial debe cumplir.

Ahora bien por litis se entiende el pleito, controversia o contienda judicial, es decir, las pretensiones de las partes que son contrarias entre sí. Esa controversia es el "objeto del proceso" y se integra precisamente con las pretensiones y defensas de las partes, que son el contenido material sobre el cual versa la actividad de los litigantes y de la autoridad administrativa.

Bajo este contexto, la obligación de la autoridad versa en pronunciarse sobre todos los puntos litigiosos objeto del debate propuestos por las partes, así como de valorar las pruebas aportadas en el juicio, pues esos órganos están constreñidos a respetar el principio de congruencia externa que debe acatarse al emitirse cualquier resolución jurisdiccional, conforme al derecho fundamental de impartición de justicia completa, previsto en los artículos 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, supuesto que en el caso concreto si se cumplió.

Lo anterior, se afirma pues de la lectura de la resolución emitida por la autoridad recurrida se advierte que la misma versa precisamente sobre el conflicto planteado por los denunciantes desde su escrito inicial recibido el 25 de junio de 2015 y, si bien es cierto, la narrativa de los hechos contenida

en la resolución impugnada es detallada solo a partir de la reposición del procedimiento, en ningún momento se deja de lado la cuestión originalmente planteada, sino que atiende detalladamente los puntos litigiosos objeto del debate propuestos por las partes.

6.6.3 Falta de personalidad del apoderado de los propietarios de los predios afectados

Dentro de sus agravios el recurrente establece que el Lic. (ELIMINADO: tres palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) carecía de personalidad para presentar la denuncia, así como para solicitar la imposición de medidas de seguridad y/o sanciones, violentando con ello el artículo 229 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible. Su argumento se califica como infundado.

Dicho precepto establece, en la parte conducente que únicamente quienes resulten directamente afectados, tendrán derecho a exigir que se apliquen las medidas de seguridad y sanciones cuando se estén llevando a cabo construcciones o fraccionamientos, que contravengan las disposiciones técnicas o jurídicas del desarrollo urbano sostenible, así como los planes o programas en la materia. Sin embargo, la situación que se resuelve no se ubica en el espacio temporal al que se refiere dicho precepto, dado que el fraccionamiento, tal como lo refiere el recurrente ya había sido entregado.

Es decir, el recurrente pretende que se considere un precepto que no es aplicable al caso concreto, siendo que en el caso el artículo aplicable es el 228 del mismo ordenamiento, el cual establece que: *Toda persona podrá denunciar, ante la Secretaría o ante las autoridades municipales, cualquier hecho u omisión que contravenga lo dispuesto en los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible, en esta Ley y demás ordenamientos que regulen el Desarrollo Urbano, bastando para darle curso el señalamiento de los datos necesarios que permitan determinar la ubicación del inmueble, así como el nombre y domicilio del denunciante.*

Además, el actuar de la autoridad puede ser oficiosa, y, si bien es cierto se establece la figura de la denuncia popular como un mecanismo de participación ciudadana, ello no es obstáculo para que la autoridad, en el ámbito de su competencia, actúe en forma oficiosa para exigir que se cumpla con la normatividad en la materia, a través de la aplicación de medidas de seguridad y el ejercicio de su facultad sancionadora.

6.6.4 Indebida valoración de las pruebas

El recurrente aduce una indebida valoración de las pruebas, refiriéndose al contenido del levantamiento topográfico efectuado por la autoridad el 28 de octubre de 2019 y presentadas las conclusiones mediante memorándum SPU/TOP/260/2019, así como a las actuaciones que se realizaron dentro del juico ordinario civil con número de expediente 811/19 del Juzgado Segundo de lo Civil por Audiencias, dentro del cual también se rindió un informe topográfico.

Ambos instrumentos señalan que al interior de los predios visitados se observan taludes integrados por materiales mixtos, tales como rocas, caliche, grava, etc., así como que dichos predios colindan con los fraccionamientos habitacionales denominados "Residencial (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II" y Residencial (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) III", así mismo, dentro de la verificación física y levantamiento topográfico se tomaron diversas fotografías que se integraron a dicho acto como anexo y en su momento se notificaron a las partes para que en uso del derecho que les concede el artículo 237 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua manifestaran lo que a su derecho conviniera.

Chihuahua capital de trabajo y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

Ahora bien, de acuerdo con lo previsto por el artículo 349 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, las actuaciones levantadas por virtud de una visita de verificación y levantamiento topográfico, deben considerarse documentales de carácter público, de tal forma que adquiere valor probatorio pleno para acreditar los hechos ahí contenidos, teniendo el mismo carácter las actuaciones llevadas a cabo en un juicio de naturaleza civil, cuyas copias certificadas fueron presentadas ante la autoridad administrativa.

Así las cosas, cuando en los instrumentos de mérito, a través del dicho de los topógrafos encargados de levantar dicha diligencia y de las fotografías, copias fotostáticas y demás pruebas científicas y tecnológicas que se acompañaron al dictamen queda de manifiesto la presencia de taludes en los predios materia de la controversia y que estos tienen relación directa e inmediata de vecindad con los fraccionamientos residenciales denominados (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero

de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II y III; es evidente que tales hechos pueden tener alcance probatorio pleno para acreditar que los mismos fueron formados durante la etapa de urbanización de los mismos, habida cuenta que se tratan de manifestaciones hechas en documentos públicos; sin que pase inadvertido el carácter iuris tantum que éstas tienen.

Sin embargo, a pesar de la posibilidad de ofrecer prueba en contrario, en el momento procesal oportuno la parte ahora recurrente no se inconformó contra el contenido del levantamiento topográfico, no ofreció prueba alguna que desvirtuara el contenido de dicha diligencia y sus anexos; ni tampoco lo hizo en contra del diverso medio de convicción consistente en informe topográfico rendido dentro del juicio ordinario civil 811/19.

Por tanto, si bien la veracidad del contenido del documento público puede desvirtuarse mediante la valoración de una prueba en contrario, en la especie dicho supuesto no aconteció, razón por la cual la valoración de la prueba efectuada por la autoridad dentro del dictado de su resolución se estima correcta y por tanto el agravio del recurrente infundado.

6.6.5 Consideraciones en torno a la facultad sancionadora de la autoridad administrativa.

Dentro de los numerales XII, XVII, XIX, XX, XXXI, XXXII, XXXIII, XXXIV y XXXV contenidos en el apartado sexto de sus agravios, el recurrente manifiesta diversas omisiones de la autoridad en torno a su facultad sancionadora, las cuales se califican como infundadas.

6.6.5.1. El recurrente señala que la multa consistente en 5,000 UMAS carece de precisión al considerar que en la resolución se debe expresar el importe exacto equivalente en UMAS. Dicha afirmación es infundada, pues en primer término se debe partir de la base de que la unidad de medida y actualización (UMA) es una unidad de medida en pesos que surgió por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de enero de 2016, a través del cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo.

A partir de esa fecha, la UMA se usa para calcular la cuantía de las obligaciones contempladas por las leyes, como multas e impuestos y cada año el Instituto Nacional de Geografía y Estadística (INEGI) determina y publica la UMA en su valor diario, mensual y anual. Así, podemos concebir

a la UMA, como una referencia económica aprobada que fue introducida para sustituir el esquema Veces Salario Mínimo (VSM).

Es la propia ley de la materia, a través del artículo 245, fracción I[6] el que establece la procedencia de aplicar multas tomando como base Unidades de Medida y Actualización (UMA), sin que ello implique falta de precisión para el infractor ya que no es necesario realizar un ejercicio interpretativo distinto a la simple intelección de la norma, para estar en aptitud de fijar su importe.

Lo anterior se afirma, pues se trata de valores que se encuentran publicados en el Diario Oficial de la Federación y son del conocimiento público. En consecuencia, el infractor puede conocer en todo momento el valor que la Unidad de Medida y Actualización tiene en determinada fecha, por ser esta el mecanismo que sirve, desde 2016, para cuantificar las obligaciones previstas en las leyes federales, de las entidades federativas y de la Ciudad de México, incluidas las multas, siendo el único parámetro válido en el país.

6.6.5.2 Contrario a lo expuesto por el recurrente en el numeral XVII de su agravio sexto, la autoridad no violenta el artículo 245 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, pues de la simple lectura del resolutivo quinto se advierte que la sanción impuesta es la multa, sin que en ningún momento se haga referencia al arresto administrativo contemplado en la fracción III de ese mismo precepto.

Lo dispuesto por la autoridad en el último párrafo del resolutivo quinto, se trata de su facultad de actuar ante la desobediencia a un mandato legítimo, en cuyo caso la norma le permite formular la denuncia correspondiente para que se ejercite la acción penal en los términos de la legislación aplicable, dado que dicha conducta está tipificada como delito, que no es lo mismo al arresto administrativo, tal como lo pretende hacer ver el recurrente.

6.6.5.3 Contrario a lo señalado por el recurrente, la autoridad si justificó la individualización de la sanción, al expresar dentro del resolutivo quinto, que el importe de la multa se impuso atendiendo a las condiciones económicas del infractor, siendo que dicha condición económica se desprende de una presunción, reconocida como prueba en el artículo 276, fracción VIII del

---

[6] ARTÍCULO 245. Las violaciones a los preceptos de esta Ley, sus Reglamentos y disposiciones que de ellos emanen, constituyen infracciones y, ante las mismas, la Secretaría o los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, podrán imponer discrecionalmente, cualesquiera de las siguientes sanciones:

I. Multa de cincuenta a diez mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización vigente en el Estado en el momento de cometer la infracción;

II. ....

Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria en el presente asunto.

Dicho ordenamiento, en su artículo 337 califica como prueba presuncional a la conclusión que se obtiene infiriendo de un hecho conocido la existencia de otro desconocido, en razón del nexo lógico y natural que exista entre ambos. En este caso, hay presunción humana pues de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél.

En la especie, el hecho debidamente probado a través de las mismas documentales exhibidas por el recurrente, es su actividad económica preponderante, y de la cual también se desprende, tal como lo afirmó la autoridad, que cuenta con los elementos técnicos, humanos y materiales para atender las medidas de seguridad impuestas en el resolutivo segundo.

Por su parte, el artículo 250 de la Ley, señala como monto mínimo para la imposición de la multa veinte veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, y como máximo hasta veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, siendo que en la resolución impugnada se fijó como multa cinco mil unidades por día, valor que resulta proporcional al caso a estudio pues no está cercano al máximo dispuesto por la ley.

Además esta cantidad de veces de UMAS diarias, está limitada por el propio artículo 250, de lo que se advierte que el tope serán precisamente veinte mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, independientemente de los días que transcurran entre el cumplimiento del plazo concedido por la autoridad (veinte días) y la efectiva atención a las medidas de seguridad impuestas. Es decir, no se debe de perder de vista que de acuerdo al resolutivo quinto, la sanción impuesta a la recurrente únicamente se aplicará en caso de que la persona moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. no atienda a las medidas de seguridad impuestas en el diverso resolutivo tercero, dentro del plazo que se le concede en el cuarto.

Aunado a lo anterior, contrario a lo expresado por el recurrente en el numeral XXXV de su agravio sexto, en ningún momento se violentó el artículo 22 constitucional ya que dicho precepto está ligado a la obra legislativa, esto es, a determinar si el legislador diseñó la penalidad o

punibilidad de las infracciones de manera coherente, tomando en consideración un orden o escala que garantice que las personas que cometen faltas similares, reciban sanciones de gravedad comparable, y que las personas condenadas por faltas de distinta gravedad sufran penas acordes con la propia graduación del marco legal.

Bajo este contexto, resulta claro que el principio contenido en el artículo 22 se infringe cuando la obra legislativa dispone, de forma marcadamente desigual, distintas penalidades para dos conductas que son igualmente reprochables y no versa sobre el tema de individualización de la sanción, expuesto por el recurrente, razón por la cual sus manifestaciones resultan insuficientes para desvirtuar la actuación de la autoridad.

6.6.5.4 Contrario a lo expuesto por el recurrente, la facultad sancionadora de la autoridad no caducó, pues de acuerdo a lo dispuesto en el numeral 112 del Código Fiscal para el Estado de Chihuahua, de aplicación supletoria, las facultades de las autoridades para imponer sanciones por infracciones, se extinguen y por lo tanto opera su caducidad en el plazo de cinco años.

En el caso concreto, la denuncia se presentó el 25 de junio de 2015, mientras que la resolución se emitió el 22 de junio de 2020, por lo que se está dentro del plazo establecido por la ley. Aunado a lo anterior, dado el tipo de conducta reprochada, al tratarse de una conducta continua, esta no ha cesado y, por tanto, el plazo estipulado en el precepto invocado no ha comenzado a contar.

Chihuahua capital del trabajo y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024

6.6.6 Consideraciones en torno a la indebida fundamentación o motivación en la resolución de la autoridad.

Dentro de los apartados X, XI, XIII, XIV, XV, XVI, XVIII, XXVI, el recurrente se duele de una indebida fundamentación o motivación en la resolución de la autoridad, calificándose dichos agravios como infundados, por las razones que se exponen a continuación.

6.6.6.1 Contrario a lo expuesto por el recurrente, en el apartado I del capítulo de considerandos la autoridad si citó como fundamento el artículo 10, haciendo alusión de las fracciones IX, inciso c), XXIII y XXVII, así como el Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua, en su artículo 69.

Bajo este contexto, resulta claro que los hechos que dan lugar a la resolución impugnada si son de naturaleza administrativa, pues tal como se desprende de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, las autoridades

del Estado y de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, están facultadas para supervisan que las acciones urbanas se lleven a cabo de acuerdo con lo dispuesto por esta Ley, su Reglamento, los Planes o Programas de Desarrollo Urbano Sostenible y demás ordenamientos aplicables, así como para imponer medidas de seguridad para evitar los daños que puedan causar las acciones ejecutadas en contravención a la ley.

6.6.6.2 El recurrente aduce una indebida motivación de la resolución recurrida, negando de manera lisa y llana cada uno de los hechos vertidos en la misma, entre ellos el relativo al depósito de material para conformar taludes que soportan la barda perimetral de los fraccionamientos Residencial (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II y III, bajo el argumento que el proyecto autorizado fue relativo a urbanización y no construcción de viviendas.

No obstante, no basta esta negativa lisa y llana, sino que el que afirma está obligado a probar, y, es precisamente de las documentales que el recurrente exhibe, a fojas 172 y 268 que se desprende que por conducto de la moral (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V. se llevaron a cabo obras de urbanización, infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, acciones efectuadas para estar en aptitud de concluir con los aludidos fraccionamientos, entre lo que se incluye precisamente la construcción de bardas perimetrales en dichos fraccionamientos, con independencia de que su proyecto no era para la construcción de viviendas.

En ese tenor, la autoridad administrativa toma en consideración dichas probanzas al momento de emitir su resolución para determinar la aplicación de las medidas de seguridad impuestas, y solo en caso de incumplimiento a estas, en uso de la facultad sancionatoria que la propia normatividad le otorga, aplicará la multa establecida en el considerando quinto, con lo cual cumple de manera adecuada con la fundamentación y motivación que todo acto de autoridad debe contener.

Al contrario de lo que expone el recurrente, la determinación de imponer medidas de seguridad por parte de la autoridad es correcta, pues

precisamente estas se dictaron para para corregir las deficiencias o irregularidades observadas causadas por las acciones realizadas por la moral recurrente en contravención a la normatividad aplicable; consistentes en el depósito de los materiales en los predios contiguos a los predios fraccionados por (ELIMINADO: cuatro palabras. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.), S.A. de C.V.

Así las cosas, se estima que la medida aplicada consistente en el retiro del material que se depositó en los predios propiedad del denunciante con motivo del deslizamiento al urbanizar los fraccionamientos (ELIMINADO: una palabra. Fundamento Legal: Artículo 116 párrafo primero de la Ley General de Transparencia y Acceso a la información Pública. En virtud de que contiene datos personales concernientes a una persona identificada o identificable.) II y III, y la ejecución de las obras necesarias para contener los rellenos de material y así evitar su corrimiento y derrumbe es la medida idónea para el caso concreto y se encuentra debidamente contemplada en la norma a través del artículo 242, fracción VII de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible, y solo en caso de que estas no se atiendan se aplicará la sanción consistente en multa, tal como lo dispone el precepto invocado, razón por la cual se confirma que la resolución de la autoridad se encuentra debidamente fundada y motivada.

6.6.6.3 El recurrente señala que la autoridad fue omisa en señalar los fundamentos relativos a su competencia dentro de resolución que se recurre. Sin embargo, la autoridad establece de manera detallada cada uno de los preceptos que la facultan para conocer del procedimiento administrativo que resolvió, así como para aplicar medidas de seguridad y sanciones, citando expresamente a lo largo de su resolución los artículos 72, fracciones I, II, VII y XI del Código Municipal para el Estado de Chihuahua; 69, fracciones I, III, XVIII y XIX del Reglamento Interior del Municipio de Chihuahua; 6, fracción IV, 10, fracciones IX, inciso c), XXIII y XXVII, 11, 141, 228, 229,230, 237, 238, 239, 241, 242, 243, 245, 246, 248, 250 de la Ley de Desarrollo Urbano Sostenible del Estado de Chihuahua; 7, fracción IV, 11, fracciones III, IV,XI, XVIII, XX; 13, 291, 292, 293, 294 del Reglamento de Desarrollo Urbano para el Municipio de Chihuahua.

Por todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que la autoridad actuó dentro del ámbito de su competencia, fundó y motivó adecuadamente su resolución y también calificó de manera adecuada las probanzas que integraron el expediente, razón por la cual se tiene por infundado su agravio sexto.

Realizadas las consideraciones anteriores se:

R E S U E L V E

PRIMERO.- El medio de impugnación intentado, consistente en el Recurso Administrativo de Revisión es el correcto para combatir el acto impugnado, de acuerdo a lo establecido por el artículo 198 y 199 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

SEGUNDO.- Se confirma el acto reclamado, en virtud de las razones expuestas y para los efectos determinados en el capítulo relativo al estudio de fondo, contenido en la presente resolución.

TERCERO.- Notifíquese personalmente la presente resolución de conformidad con lo establecido por los artículos 133, fracción III y 134, últimos párrafo, ambos del Código de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria según lo que establece por la fracción VIII del artículo 203 del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, e infórmesele a la recurrente que cuenta con un plazo de treinta días promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 2 y 14, fracción I, inciso a) de la Ley Justicia Administrativa del Estado de Chihuahua.

CUARTO.- Una vez que esta resolución quede firme, la autoridad administrativa podrá aplicar el apercibimiento que establece el apartado quinto de los resolutivos incluidos en la resolución administrativa dictada dentro del procedimiento JI-065/17.

QUINTO.- Hágase la correspondiente anotación en el libro de expedientes en trámite y en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido.

Así lo resolvió y firma el **LICENCIADO SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA**, Secretario del Honorable Ayuntamiento de Chihuahua; aprobado y sancionado por la **LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA**, Presidente Municipal de Chihuahua, el día dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 203, fracciones VI y VII del Código Municipal para el Estado de Chihuahua.

Chihuahua, Chihuahua, a 16 de diciembre de 2021.

LIC. SANTIAGO DE LA PEÑA GRAJEDA
SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO

SANCIONADO POR:

LIC. MARCO ANTONIO BONILLA MENDOZA
PRESIDENTE MUNICIPAL DE CHIHUAHUA

RAFR/SGC

Chihuahua
capital de trabajo
y resultados
Gobierno Municipal 2021-2024